

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y EL COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORES Y EDUCADORAS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN PARA LA DIFUSIÓN DEL PACTO POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN CASTILLA Y LEÓN Y LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA EL MALTRATO INFANTIL

En Valladolid, a 8 de junio de 2018

REUNIDOS

De una parte, la Excm. Sra. Dña. Alicia García Rodríguez, Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, en su calidad de Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, nombrada por Acuerdo 8/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, actuando en nombre y representación de la Gerencia de Servicios Sociales y en el ejercicio de la competencia conferida por el artículo 13.2.d) del Decreto 2/1998, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

De otra, Dña. Carmen Carrión Ordás, en su calidad de Presidenta del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León, (CEESCYL), en virtud de las facultades que le otorga el artículo 31 del Estatuto Particular del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León, publicado por Orden IYJ/1974/2009, de 1 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León, el Estatuto Particular del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León (BOCyL núm. 201, de 20 de octubre de 2009).

Intervienen en representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose mutuamente capacidad y legitimación para otorgar y firmar el presente Protocolo, y en su virtud,

EXPONEN

1. Que la “Convención sobre Derechos del Niño”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es el primer instrumento internacional que reconoce a los niños y niñas como agentes sociales y como titulares activos de sus propios derechos.

Que en ella se recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. No sólo se reconoce el derecho de niñas y niños menores de dieciocho años, al pleno desarrollo físico, mental y social, y a la expresión libre de sus opiniones, sino que, también, se obliga a los Estados adheridos a promover y reforzar un entorno protector y de bienestar para la infancia.



Que la Convención define obligaciones y responsabilidades para los gobiernos de los Estados firmantes, pero también a otros agentes relevantes, como padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores, y, por supuesto, a los propios niños y niñas, con lo que su consecución supera el ámbito meramente gubernamental, para convertirse en un reto y una labor de toda la sociedad.

2. Que el artículo 13.6 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León reconoce a los menores de edad el derecho a recibir de las Administraciones Públicas de Castilla y León, con prioridad presupuestaria, la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el contexto familiar y social, en los términos que se determinen normativamente.

En materia competencial el artículo 70.1.10º del citado Estatuto atribuye a la Comunidad de Castilla y León competencia exclusiva en materia asistencia social y servicios sociales, para la protección y atención a la infancia, prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados por la exclusión social y protección y tutela de menores.

3. Que la Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León, establece como derechos específicos de especial protección y promoción, entre otros, el derecho a la igualdad, a la vida, a la integridad física y psíquica, al libre y pleno desarrollo de la personalidad, a la integración social y a la protección de la salud, derechos todos ellos a cuya protección y promoción el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León puede contribuir.

4. Que la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor señala la obligación de toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor, de comunicarlo a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.

En parecidos términos se manifiesta la Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León, que señala que cualquier persona que detecte una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, y en especial quienes conozcan de ella por su profesión, función o responsabilidad, lo deberá comunicar a la mayor brevedad a las autoridades competentes o a sus agentes más próximos, a fin de que se proceda a la adopción de las medidas y actuaciones adecuadas, obligación que compete particularmente, entre otros, a los centros y servicios sanitarios, y se extiende a todas las instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, señalando que los respectivos Colegios Profesionales impulsarán especialmente la sensibilización de sus colegiados sobre la trascendencia de la detección de las situaciones de riesgo o posible desamparo que afecten a menores y de las que conozcan en razón de su actividad, así como de la inmediata y adecuada comunicación de las mismas.

5. Que la Ley 14/2002, de 25 de julio, atribuye a la Entidad Pública de Protección y Reforma de Menores en Castilla y León funciones generales para la coordinación de campañas

de alcance regional destinadas a la sensibilización social de los menores, profesionales y población en general sobre los derechos de la infancia, la coordinación de las actuaciones de promoción y defensa de los derechos de la infancia y el fomento, en el ámbito regional, de la iniciativa social y la participación ciudadana.

6. Que la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León establece entre los fines esenciales de los Colegios Profesionales y los Consejos de Colegios Profesionales de Castilla y León el velar para que la actividad profesional se adecúe a los intereses de los ciudadanos, señalando entre las funciones de los Colegios el velar por la ética profesional y por el respeto a los derechos de los ciudadanos, organizar actividades y servicios de carácter profesional, asistencia, de previsión y análogos que sean de interés para los colegiados y procurar el perfeccionamiento de la actividad profesional y la formación permanente de sus colegiados.

Igualmente señala esta Ley que la Junta de Castilla y León podrá suscribir con los Colegios de Castilla y León convenios de colaboración para la realización de actividades de interés común y especialmente para la promoción de actividades orientadas a la defensa del interés general.

7. Que el Estatuto del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León establece entre sus fines esenciales mejorar el nivel de calidad de las prestaciones profesionales de las personas colegiadas, promoviendo su formación de manera continuada, así como velar para que la actividad profesional se adecue a los derechos y libertades públicas recogidas en la legislación vigente.

El citado Estatuto establece entre las funciones del Colegio ordenar la actividad de las personas colegiadas, velando por la ética y dignidad profesional de aquéllas, así como conciliando sus intereses con el interés social y con los derechos de la ciudadanía, en el marco previsto en las leyes; promover y desarrollar la formación profesional y fomentar el perfeccionamiento científico y técnico de las personas colegiadas; organizar actividades y prestar servicios comunes de carácter profesional, educativo, cultural y social, entre otros, que sean de interés para las personas colegiadas; y cumplir y hacer cumplir a las personas colegiadas la legislación aplicable.

Igualmente el Estatuto autoriza al Colegio a suscribir con Entidades públicas convenios.

8. Que en el seno de las Cortes de Castilla y León, se articuló un consenso de todos los Grupos Parlamentarios a favor de los derechos de la infancia, mediante la aprobación, el 27 de marzo de 2012, de una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en cuya resolución se insta a la Junta de Castilla y León a apoyar y fomentar, dentro del marco de un Pacto por la Infancia, diversas medidas a favor de los niños y niñas de la Comunidad Autónoma.

Que el día 30 de octubre de 2012, en el Consejo Regional de Atención y Protección a la Infancia, se aprobó el Pacto por los Derechos de la infancia en Castilla y León, cuyo

objetivo es implicar a todas las Administraciones Públicas, al tejido social y empresarial, a todas las entidades, fundamentalmente las representadas por el tercer sector, y por ende a todos los agentes políticos, sociales, económicos y de cualquier otra índole de Castilla y León con la finalidad de mejorar el bienestar de los niños y niñas, reconociendo y desarrollando sus derechos y, por tanto, transformando a mejor, nuestra comunidad y las comunidades locales para el presente y el futuro; movilizandolos recursos necesarios para asegurar un desarrollo humano justo y solidario, basado en el principio del interés superior del niño y la niña.

Que el Pacto recoge diversos compromisos orientados a impulsar la elaboración y desarrollo de políticas de infancia, a apoyar y fomentar acciones a favor de la infancia en Castilla y León, especialmente promoviendo sus derechos y facilitando canales para su participación como ciudadanos, y a promover tanto a nivel municipal como a nivel autonómico el desarrollo y la implementación de diferentes medidas para hacer visible a la infancia en la sociedad en general.

Que el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León mostró su compromiso por la infancia de la Comunidad, adhiriéndose al Pacto.

9. Que el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León ha mostrado su interés por mantener una colaboración estrecha que sirva de estímulo dinamizador de los derechos de la infancia y la prevención y protección contra el maltrato infantil.

Por todo ello, la Gerencia de Servicios Sociales y el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León que suscriben este Protocolo, consideran fundamental fortalecer la promoción de los derechos de la infancia mediante la difusión del pacto por los derechos de la Infancia en Castilla y León y la prevención y protección contra el maltrato infantil.

En virtud de lo expuesto, las partes firmantes acuerdan formalizar el presente Protocolo con arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera.- El presente Protocolo tiene por objeto establecer el marco genérico de colaboración entre las partes firmantes para impulsar y fomentar actuaciones en materia de promoción de los derechos de la infancia y la prevención y protección contra el maltrato infantil.

Segunda.- El Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León se compromete a colaborar en la promoción y difusión de los derechos de la infancia y la prevención y protección contra el maltrato infantil, mediante alguna de las siguientes actuaciones:

- Promoviendo la adhesión al Pacto por los Derechos de la Infancia en Castilla y León de aquellas entidades que presten servicios en el campo de la educación social, mediante la firma del documento de adhesión previsto en el ANEXO 1 al presente Protocolo, llevando a cabo las gestiones a tal fin.
- Favoreciendo la promoción y difusión de los derechos de la infancia entre sus colegiados, mediante la divulgación entre ellos de aquellas actuaciones que puedan ser de su interés, así como la invitación a su participación.
- Participando en la conmemoración del Día Universal del Niño (20 de noviembre), mediante la realización de actos que den visibilidad al mismo.
- Difundiendo entre todos los colegiados los protocolos vigentes para la actuación en casos de maltrato familiar.
- Mejorando la formación de los colegiados en la prevención y protección contra el maltrato infantil.

Tercera.- La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León colaborará con el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León facilitando el apoyo técnico y el asesoramiento preciso para la realización de sus actuaciones, así como a efectuar la coordinación necesaria a fin de facilitar el cumplimiento de sus compromisos.

Igualmente colaborará en la mejora de la formación de los colegiados, participando en las actividades de formación relacionadas con el objeto de este Protocolo que se lleven a cabo por el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León.

Cuarta.- Se crea una Comisión de Seguimiento, constituida por dos representantes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León nombrados por el titular de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales y dos representantes designados por el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León.

La comisión tendrá por finalidad la de velar por el desarrollo del presente Protocolo, resolver las dudas y controversias que, en su caso se susciten en su desarrollo, realizar el seguimiento de las situaciones que se deriven de él y proponer aquellas otras iniciativas que considere oportuno para su mejora. En su primera reunión la Comisión establecerá sus normas de funcionamiento.

A esta comisión como órgano colegiado le serán aplicables las disposiciones sobre órganos colegiados recogidas en el Capítulo IV del Título V de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

Quinta.- Este Protocolo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, desde la fecha de su formalización, prorrogándose automáticamente por años naturales, salvo que expresamente se denuncie por alguna de las partes firmantes.

La denuncia a que se hace referencia en el párrafo anterior deberá producirse con una antelación mínima de un mes al término del correspondiente periodo de vigencia.

Sexta.- Durante la vigencia del presente Protocolo podrán llevarse a cabo modificaciones en sus estipulaciones por acuerdo expreso de las partes.

El presente Protocolo se extinguirá por el mutuo acuerdo de las partes y la denuncia formulada por una de las partes conforme establece la cláusula quinta. Por la Comisión de Seguimiento se determinará la forma de finalizar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción.

Séptima.- El presente protocolo tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo previsto en sus estipulaciones, quedando excluido del ámbito de la legislación de contratos del sector público, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y aplicación del presente Protocolo deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes a través de la Comisión de Seguimiento prevista en la estipulación cuarta.

Y en prueba de la conformidad firman dos ejemplares del presente Protocolo, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

**LA CONSEJERA DE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA
DE SERVICIOS SOCIALES**



Alicia García Rodríguez

**LA PRESIDENTA DEL COLEGIO
PROFESIONAL DE EDUCADORES Y
EDUCADORAS SOCIALES DE
CASTILLA Y LEÓN**



Carmen Carrión Ordás

ANEXO 1

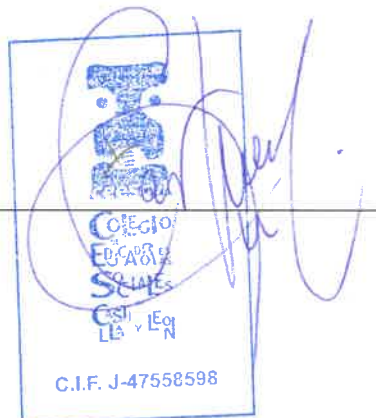
DOCUMENTO DE ADHESIÓN AL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y EL COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORES Y EDUCADORAS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN PARA LA DIFUSIÓN DEL PACTO POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN CASTILLA Y LEÓN Y LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA EL MALTRATO INFANTIL

En VALLADOLID a, 8 de JUNIO de 2018

D./Dña. M^º DEL CARMEN CARRIÓN OROAS en nombre y representación de COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORES Y EDUCADORAS SOCIALES, se adhiere al Protocolo de colaboración firmado entre la Gerencia de Servicios Sociales y el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León para la difusión del Pacto por los derechos de la infancia en Castilla y León y la prevención y protección contra el maltrato infantil, manifestando su adhesión al Pacto por los Derechos de la Infancia y comprometiéndose a colaborar en la promoción y difusión de los derechos de la infancia y en la prevención y protección contra el maltrato, mediante alguna de las actuaciones contenidas en el citado Protocolo.

Y para que conste se firma el presente documento en el lugar y fecha indicados.

Fdo.:



ANEXO 1

DOCUMENTO DE ADHESIÓN AL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y EL COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORES Y EDUCADORAS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN PARA LA DIFUSIÓN DEL PACTO POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN CASTILLA Y LEÓN Y LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA EL MALTRATO INFANTIL

En Valladolid a, 8 de junio de 2018

D./Dña. M^a del Carmen Carrión Ordás en nombre y representación de Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León, se adhiere al Protocolo de colaboración firmado entre la Gerencia de Servicios Sociales y el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León para la difusión del Pacto por los derechos de la infancia en Castilla y León y la prevención y protección contra el maltrato infantil, manifestando su adhesión al Pacto por los Derechos de la Infancia y comprometiéndose a colaborar en la promoción y difusión de los derechos de la infancia y en la prevención y protección contra el maltrato, mediante alguna de las actuaciones contenidas en el citado Protocolo.

Y para que conste se firma el presente documento en el lugar y fecha indicados.

Fdo.: M^a del Carmen Carrión Ordás

